



Con fecha 14 de agosto de 2020 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Sanidad, solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por Alcohol Task Force, solicitud que quedó registrada con el número **001-045328**.

Con fecha 18 de agosto de 2020 esta solicitud se recibió en la Dirección General de Salud Pública, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General resuelve denegar el acceso a la información a que se refiere la solicitud presentada por [REDACTED], en base a lo establecido en el artículo 14.1.h) de la Ley 19/2013.

La información que se solicita se refiere a información que obra en poder del Registro Oficial de Biocidas en virtud de los tramites que deben realizar las empresas para solicitar el registro de productos biocidas. Dicha información esta protegida por el secreto comercial. El procedimiento de evaluación de las autorizaciones sobre las que se pretende el acceso a la información todavía no ha comenzado. Por tanto, dicha información todavía no ha sido evaluada por este Ministerio. La información solicitada no parece relevante desde el punto de vista del interés público. Se trata de información que quiere recabar una empresa sobre las solicitudes realizadas por otras empresas. Por otra parte, nos gustaría hacer referencia al considerando 61 así como a los artículos 66 y 67 del Reglamento (UE) nº 528/2012 relativo a la comercialización y uso de biocidas, que se refieren, precisamente, a los aspectos relacionados con la confidencialidad de la información.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA
(firmado electrónicamente)

Pilar Aparicio Azcárraga

